

El derrumbamiento del sistema soviético: un análisis político

El año 1991 en la difunta URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) ha sido el año de la «lucha final» en el complejo proceso de enfrentamiento entre conservadores, reformadores y rupturistas del sistema. Este enfrentamiento ha constituido la espina dorsal de la lucha por el poder que se abrió inevitablemente en cuanto se impuso el principal y más concreto logro de la *perestroika*: la progresiva democratización de la sociedad. La irrupción de ésta en la escena política supuso, automáticamente, el resquebrajamiento del monopolio del poder y el desplazamiento de su centro de gravedad, el aparato comunista, a otras fuerzas. Gran parte de la última etapa de la *perestroika*, que se abre en marzo de 1989 con las primeras elecciones generales relativamente libres de todo el período soviético y acaba con el golpe fallido de agosto de 1991, es la historia de esas fuerzas emergentes, de su arraigo, configuración interna y, en definitiva, de su relación con el referente obligado, el partido comunista. Pero, a fin de cuentas, ha sido la esencia misma, la raíz estructural del sistema soviético —la fusión entre partido y Estado— lo que ha resultado ser su más mortífero caballo de Troya y la razón última de la caída de Gorbachov.

Las elecciones generales son la primera señal evidente de que el marco del PCUS (Partido Comunista de la Unión Soviética), en donde, lógicamente, se plasmaron las primeras expresiones de la pluralidad naciente, resulta ya demasiado estrecho para seguir reflejando esa realidad. Ante ello, la reacción de Gorbachov consiste fundamentalmente en concentrarse en la batalla de renovación *interna* del partido para adecuarlo al papel que él le atribuye de cabeza del movimiento de reformas. Esto le lleva a descuidar el verdadero significado, en términos de apoyo social, de las personalidades democráticas más radicales (en su mayoría aún integradas por aquel entonces en el partido) y de las nuevas y aún débiles «organizaciones sociales», eufemismo acuñado para designar toda aquella fuerza que aspiraba a alguna autonomía fuera del partido.

Mientras tanto, el proceso de cambio que se opera en todo el territorio soviético se sigue acelerando y ahondando con el agravamiento de la situación económica, y cuando empieza 1990 lo que, unos meses antes, era la primera institución mínimamente democrática del país, el Congreso de Diputados del Pueblo de la URSS, ya se percibe —por el hecho de estar dominado por el partido— como uno de los bastiones conservadores que obstaculiza la redistribución del poder que esperan las nuevas tendencias. Como era previsible, la necesidad para éstas de encontrar otros marcos institucionales hace que se vuelquen entonces en las elecciones generales y municipales, celebradas a nivel de las repúblicas a principios de 1990, en las que se confirma que cuentan con un apoyo importante de la población. Así empieza

Carmen CLAUDÍN
Responsable de Países del Este,
Fundació CIDOB, Barcelona

la revitalización de instituciones hasta entonces puramente decorativas como los parlamentos republicanos que nunca habían sido otra cosa que un tentáculo más de la dominación del PCUS. De ahí que, a finales de ese año, se llega a una situación institucional insostenible que se caracteriza por un desfase político cada vez más profundo entre el poder central, tanto más paralizado en cada república cuanto más deslegitimado ha quedado en las elecciones locales, y los poderes republicanos, tanto más activos en su territorio cuanto más representativos han salido de las urnas. A lo cual se suma el hecho importante de que Gorbachov sigue igual que cuando accedió a la presidencia, sin el refrendo de elecciones directas.

Para salir de la crisis, Gorbachov opera dos virajes, uno en otoño de 1990 y otro en primavera de 1991. Todo el desarrollo del año 1991 estará condicionado por el solapamiento de estos dos virajes de signo contrario que abren, cada uno de ellos, una dinámica excluyente que estalla en agosto.

El viraje conservador

Con el primer viraje —que todas las fuerzas democráticas denuncian como conservador—, 1991 empieza bajo los presagios más sombríos de todo el período de la *perestroika*. Esta nueva orientación se produce en otoño de 1990 como un intento de Gorbachov de poner fin a la parálisis del poder ejecutivo, resultante de las sucesivas declaraciones de soberanía de los *Soviets* Supremos (Parlamentos) republicanos que proclamaban y aplicaban la supremacía de las leyes republicanas sobre las soviéticas (la llamada «guerra de las leyes»). La debilidad de la política centrista de Gorbachov quedaba evidenciada por su incapacidad de estabilizar una situación cada vez más caótica y le empujaba inevitablemente a buscar un apoyo político que reforzara su posición. Por un lado, su convencimiento —debido en gran parte a su formación y convicciones personales— de que el partido sigue siendo el único instrumento fiable de poder ejecutivo y, por otro, su falta de confianza en la capacidad y orientación de las nuevas fuerzas democráticas, le llevan a ceder a la creciente presión que ejerce sobre él el sector conservador del partido. Durante el último trimestre de 1990, este viraje se plasma, entre otros, en el abandono del plan Shatalin «de 500 días», en la destitución a la cabeza del ministerio del Interior de un hombre bastante liberal como Vadim Bakatin y su sustitución por Borís Pugo, presidente del Comité Central del PCUS, y en la presentación de la candidatura de Guennadi Yanáev, un fun-

cionario típico del aparato, para su elección al cargo de vicepresidente. Todo ello configura un panorama interno que explica, en gran medida, la espectacular dimisión, en diciembre de 1990, del ministro de Asuntos Exteriores, Edvard Shevardnadze, y los términos dramáticos con que denuncia un peligro de golpe de Estado. A principios de 1991, Gorbachov tiene que confrontar su nueva línea a tres momentos fuertes: la crisis del Báltico, las huelgas mineras y la celebración del referéndum de la Unión.

La crisis del Báltico

Los primeros efectos contraproducentes de esta opción de Gorbachov se hacen sentir desde los primeros días de enero en el Báltico. Las fuerzas del ministerio de Defensa y de la policía paramilitar (OMON, Destacamentos de Milicia para Asuntos Especiales) del ministerio del Interior (MVD) protagonizan una intervención armada, en Lituania y Letonia, que apunta directamente a cuestionar la legitimidad de las autoridades republicanas y que se salda con 19 muertos, la mayoría civiles, y varios centenares de heridos. El golpe de fuerza, que se produce inmediatamente después de la ruptura por parte soviética de las negociaciones sobre el estatus de Lituania, adquiere inmediatamente un significado emblemático que no habían conseguido alcanzar anteriores conflictos, sin embargo más sangrientos que éstos. La gran diferencia radica en que, en Vilnius y Riga, por primera vez desde el inicio de la *perestroika*, el poder central recurre a la fuerza armada para socavar instituciones masivamente refrendadas por la voluntad popular. El trauma en las filas democráticas y entre los movimientos nacionalistas es tanto mayor cuanto que las repúblicas bálticas estuvieron siempre a la cabeza de los cambios democráticos. Además, si algún derecho a la independencia recogía mayor consenso entre los soviéticos era el de los bálticos, ante los cuales, por añadidura, ya se había reconocido oficialmente la ilegitimidad del pacto Mólotov-Ribbentrop de 1939 y de la anexión soviética. Otro motivo de preocupación es el momento elegido para la intervención que refuerza la idea de que se trata de una acción madurada que cuenta, para desviar la atención internacional, con la crisis del Golfo y la necesidad de los occidentales de asegurarse el apoyo soviético. Por fin, la indignación se acrecenta cuando empiezan a aparecer Comités de Salvación Nacional, formados por miembros del partido comunista prosoviético (los comunistas bálticos se habían escindido a finales del 89 y principios del 90), que llegan incluso a formar gobiernos fantoches y sirven de pretexto al ministro del Interior para legitimar la intervención, según el escenario clásico de las ingerencias soviéticas en los asuntos internos de

los países «hermanos» como Hungría en 1956 y Checoslovaquia en 1968.

Pero el mayor motivo de preocupación proviene claramente de la actitud de Gorbachov durante la crisis. Actitud que, cuando menos, se puede tildar de ambigua. Probablemente, en ningún momento de su trayectoria, la imagen de Gorbachov ha salido tan deteriorada dentro y fuera de su país. Ninguna ocasión anterior había puesto tan de manifiesto las vacilaciones y contradicciones de su acción y pensamiento políticos. En su primera declaración pública, el 10 de enero, Gorbachov hace responsable de los acontecimientos al Parlamento lituano por violar la Constitución soviética y burlarse de los derechos civiles, llegando a denunciar la utilización de consignas democráticas «para encubrir una política orientada a la restauración del sistema burgués» (Foye, 1991a). Por otra parte, el ambiente de censura creciente en los medios de comunicación que provocan manifestaciones masivas en Moscú y las amenazas de Gorbachov de suspender la ley sobre la prensa contribuyen a confirmar los peores temores. La cuestión central que se debate entonces y que vuelve a surgir a raíz del golpe fallido de agosto es, evidentemente, el grado de responsabilidad directa de Gorbachov en los acontecimientos del Báltico. ¿Quién dio la orden de disparar? y, si no fue Gorbachov, ¿cómo pudo pasar? serán preguntas recurrentes durante mucho tiempo. Ninguna de las respuestas deja en buen lugar a Gorbachov. Su responsabilidad política es obvia teniendo en cuenta el respaldo que ha dado a los otros dos protagonistas de la crisis, Dmitri Yázov (ministro de Defensa) y Borís Pugo (ministro del Interior), sumado al hecho de que Gorbachov nunca llega a condenar de manera absolutamente inequívoca los trágicos acontecimientos. Pero incluso la interpretación más benigna para Gorbachov, a saber, que la crisis del Báltico fue el resultado, como dijeron algunos de sus consejeros, de una trampa de la derecha en la que cayó sin saberlo, suscita, ya entonces, una alarma generalizada respecto al grado de control real que ejerce el presidente sobre las instituciones involucradas. Como observa Stephen Foye, «decir que Gorbachov no estaba involucrado en los acontecimientos de Vilnius lleva a la conclusión de que fue engañado por las Fuerzas Armadas, el KGB (Comité de Seguridad del Estado), el MVD y, presumiblemente, por el Partido Comunista» (Foye, 1991a). Aunque cueste admitirlo, esta posibilidad, a la luz del golpe fallido, no es descartable. Pero, sea como sea, es sin lugar a duda el mismo Gorbachov quien se tiende su propia trampa. Lo que probablemente no se sabrá nunca con certeza es si la preocupante lentitud que demuestra Gorbachov en poner fin a la espiral báltica responde a su dificultad para entender el verdadero alcance de los hechos o a la de restablecer su autoridad

sobre los responsables militares, o a ambas cosas a la vez. Lo único seguro, en todo caso, es que esta crisis no ha tenido ningún efecto positivo en las ya problemáticas relaciones del centro con las repúblicas, que no ha contribuido a aumentar la confianza de éstas en el centro ni a aliviar la guerra de los presupuestos, otra modalidad de la guerra de leyes. A nivel internacional, la primera consecuencia es la decisión norteamericana de aplazar la cumbre prevista para febrero entre Bush y Gorbachov. Los lituanos, por su parte, sacan rápidamente la lección de la crisis: convocan para el 7 de febrero un referéndum sobre la independencia que se adelanta a la convocatoria de Gorbachov para marzo y que consigue un apoyo arrollador de la población e incluso un voto positivo importante en las zonas de mayor concentración rusa y polaca.

Si este conflicto ha sido probablemente el primer factor que da a pensar a Gorbachov sobre la oportunidad de la línea escogida, las consecuencias de esta reflexión no se hacen notar hasta más tarde. El 14 de enero, Gorbachov nombra primer ministro a Valentín Pávlov, que no destaca como «halcón» pero que tampoco es conocido por su talante liberal. Pávlov, fundamentalmente un técnico, es en opinión de algunos observadores soviéticos, el que menor convicción ha demostrado en su participación en el golpe de agosto. Desde las primeras horas de éste, opta por la vía rusa favorita para ignorar lo que uno prefiere no ver: ahogarse en alcohol. Pero, hasta entonces, Pávlov va a desempeñar un papel importante en la línea del primer viraje. Mientras tanto, un nuevo factor de crisis irrumpe en el camino de Gorbachov.

Las huelgas mineras

Entre marzo y abril, un amplio movimiento huelguístico se extiende en las minas de carbón de la Federación Rusa, Ucrania y, finalmente, Bielorrusia. La importancia de las huelgas mineras sobre el desarrollo del proceso interno en la URSS no ha sido, tal vez, bastante valorado fuera del país. En mi opinión, éstos fueron, además de los resultados electorales republicanos, uno de los indicadores más claros de la voluntad de cambio de la sociedad soviética.

Se trata de la primera gran huelga del período gorbachoviano después del «ensayo general» que se había producido en julio de 1989. Aunque tuvieron cierto alcance entonces, los paros habían sido mucho más limitados y de menor duración, además de estar dominados por reivindicaciones de carácter económico. Esta vez la huelga, que durará dos meses largos, adquiere rápidamente proporciones imponentes y acapara la atención de todos los medios informativos. También en el período anterior se habían dado explosiones sociales

y huelgas salvajes, todas ellas motivadas por la situación material, inmediatamente aplastadas sin contemplaciones y condenadas al silencio absoluto (Claudín, 1981). Esta vez, las reivindicaciones políticas son la característica dominante del movimiento huelguístico: dimisión de Gorbachov y del Gobierno, transferencia de las minas a la jurisdicción republicana en el caso ruso, disolución de las células del partido en los lugares de trabajo y nuevas elecciones republicanas en el caso bielorruso. No es difícil ver que se reúnen aquí todos aquellos elementos claves del sentir popular que concurren a la deriva del Estado soviético: cambio de dirección política, soberanía nacional y liquidación del PCUS. Este movimiento huelguístico, que destaca también por una organización interna inesperadamente buena, a su vez ha permitido a la población conocer y desarrollar una experiencia nueva, la solidaridad activa. En una sociedad atomizada y compartimentada como era la soviética hasta pocos años antes, este hecho adquiere un valor muy decisivo. Además, las consecuencias económicas de los paros pronto se revelan desastrosas para una situación ya muy deteriorada. Por fin, este episodio tiene que haber tenido una influencia importante en los tres dirigentes republicanos que se encontraron a la postre en los inicios de la CEI (Comunidad de Estados Independientes). Para Leonid Kravchuk es una confirmación más de la línea adoptada en el sentido de consolidar la soberanía ucraniana. Stanislau Sushkévich, entonces vicepresidente del *Soviet* Supremo republicano y futuro presidente, es uno de los negociadores con los mineros y habrá entendido claramente por dónde soplaban los vientos en la hasta ese momento tan tranquila Bielorrusia. Por fin, la intervención de Yeltsin, a principios de mayo, es decisiva para convencer a los huelguistas de que reanuden su trabajo. Una de las promesas que les hace es la de contribuir a liquidar la dominación del PCUS, que los obreros identifican claramente como el responsable último de la situación del país. De ahí que el decreto de Yeltsin, del 20 de julio, sobre la disolución de las células del partido en las empresas e instituciones públicas en el territorio ruso es absolutamente coherente con sus compromisos adquiridos. Pero, por encima de todo, el principal argumento que convence a los mineros para volver al trabajo es la transferencia de las minas a la jurisdicción rusa, transferencia que Yeltsin ha conseguido poco antes en las negociaciones entre Gorbachov y los presidentes de nueve repúblicas, conocidas como «acuerdo 9 + 1».

Con este acuerdo, Gorbachov inicia claramente su segundo viraje. Una serie de factores que se suman en marzo y principios de abril le convencen de la necesidad de abandonar urgentemente la línea de actuación seguida desde el otoño de 1990.

Del referéndum de la Unión al acuerdo 9 + 1

La celebración de un referéndum sobre el mantenimiento de la Unión era, desde hacía tiempo, el caballo de batalla de Gorbachov. A principios de este año, el referéndum ya representaba para él el último recurso para demostrar a los líderes republicanos que las tendencias centrífugas iban en contra de la voluntad popular y, de paso, para reforzar su propia posición desbloqueando la parálisis del ejecutivo.

La falta de claridad de la pregunta planteada («¿Considera Ud. necesario preservar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como una federación renovada de repúblicas iguales y soberanas, en la que los derechos humanos y las libertades de todas las nacionalidades serán plenamente garantizadas?») no es la única de las peculiaridades del referéndum, celebrado finalmente el 17 de marzo. Para empezar, en las seis repúblicas (las tres bálticas, Georgia, Moldavia y Armenia) que, por razones diversas, se niegan a llevarlo a cabo en la fecha y modalidad propuestas, sólo votan los representantes de las minorías nacionales de cada territorio. En las consultas separadas que organizan esas repúblicas, antes o después del 17 de marzo, una arrolladora mayoría vota a favor de la independencia. De las nueve repúblicas restantes, sólo cinco (Azerbaiján, Bielorrusia, Kirguizia, Tadjikistán y Turkmenistán) plantean únicamente la pregunta original. Por fin, y sobre todo, las tres más importantes o bien añaden otra pregunta (Federación Rusa y Ucrania) o bien la cambian pura y simplemente (Kazajstán). Por consiguiente los resultados permiten varias lecturas y, como ya argüían los principales dirigentes republicanos, se prestan fácilmente a interpretaciones contradictorias. Conviene recordar, por ejemplo, que la lectura unilateral de estos resultados sirve de pretexto a Anatoli Lukiánov —presidente del *Soviet* Supremo soviético y uno de los más próximos colaboradores de Gorbachov— para denunciar el contenido del Tratado de la Unión que se iba a firmar en agosto, en una declaración reproducida por los golpistas y puesta en circulación simultáneamente a su primer decreto.

De ahí que la victoria del sí no puede sino despertar en Gorbachov una satisfacción mitigada por el análisis detallado de los resultados en las tres repúblicas principales. En Kazajstán, en donde se da la mayor proporción de residentes rusos, la población vota positivamente por la preservación de la URSS como una unión de «Estados soberanos iguales». En Ucrania, la respuesta positiva a la pregunta del centro (70,2 %) queda claramente superada por el apoyo (80,16 %) a la pregunta adicional sobre la pertenencia de la república a una «Unión de Estados Soviéticos Soberanos, sobre la base de su declaración de soberanía». En la Federación

